

Tres miradas al quehacer de los intelectuales en Colombia se incluyen en esta sección. Las dos primeras fueron elaboradas a solicitud del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, con motivo de sus diez primeros años de labores (1986-1996). Tomado como pretexto dicha efemérides, el Instituto decidió someterse a la mirada crítica de cuatro evaluadores, tres internacionales y uno colombiano, a quienes solicitó de manera expresa señalar los aportes, las ausencias, y las necesarias reorientaciones tanto de la producción como de las estrategias de comunicación del Instituto. Se incluyen en esta sección los dos balances relativos al tema de mayor visibilidad del Instituto a lo largo de esa primera década de actividad, La Violencia. El primero, elaborado por el sociólogo de la Escuela de Altos Estudios de París y uno de los más notables expertos sobre el tema, Daniel Pécaut, es un detallado estudio de la producción bibliográfica, los campos temáticos, las perspectivas analíticas y las limitaciones conceptuales del elevado número de investigadores e investigaciones nucleadas en torno al grupo básico y de planta del IEPRI. El segundo balance es el realizado por el antropólogo colombiano Santiago Villaveces (PH.D. Universidad de Rice, Houston, Texas) con un énfasis distinto pero genuinamente complementario del anterior: más que a la producción misma, su mirada apunta a las representaciones que de sí mismos, de sus escenarios de acción y de su objeto se han ido construyendo los investigadores. Muy notable es el esfuerzo por describir al IEPRI, contra todas las imágenes que se pueden tejer desde fuera, como un campo de tensiones teóricas, éticas y valorativas, con sus ventajas y sus riesgos.

Finalmente, cierra el cuadro Gonzalo Sánchez con un ensayo de síntesis y en una perspectiva de larga duración sobre las transformaciones de la trilogía intelectuales-poder-cultura, desde los tiempos de Caro, Nuñez y La Regeneración hasta la Constitución de 1991. En él se exploran, a manera de paradigmas, las múltiples y a veces complementarias, a veces excluyentes funciones de dominación, de legitimación y subversión o crítica del orden social y político que han desempeñado los intelectuales en los momentos más representativos de los últimos cien años o más de historia cultural colombiana.

Las reflexiones de los autores apuntan a una verdadera indagación sobre las comunidades académicas en nuestro país. Por eso nos ha parecido importante divulgarlas y compartirlas con nuestros lectores.

# La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia\*

**DANIEL PÉCAUT**

DANIEL PÉCAUT  
Sociólogo,  
profesor de la  
Escuela de Altos  
Estudios en  
Ciencias Sociales,  
París, Francia

El trabajo desempeñado por el IEPRI sobre la violencia es, a consideración de muchos, extraordinario. Las obras y artículos que allí se han publicado dan cuenta tanto de la evolución en el tiempo de los fenómenos de violencia como de la diversidad de sus dimensiones. Estos manifiestan una toma de posturas lúcidas, en su mayoría valerosas, inspiradas en una preocupación ético-política, la cual suscribo plenamente. La revista *Análisis Político* ha ganado un prestigio nacional e internacional muy meritorio.

La influencia de sus investigadores es evidente. Basta, al respecto, levantar un inventario del número de coloquios, foros y comisiones en las cuales han participado. Conviene igualmente subrayar su audiencia en los medios de comunicación y en la opinión pública.

Una etapa de investigaciones ha concluido, indudablemente. *Análisis Político* tiende en el último tiempo a consagrar cada vez menos artículos al tema de la violencia y se abre cada vez más a las reflexiones internacionales.

---

\* Traducción de Mariana Escobar Arango.

Esta última evolución me parece bienvenida. Sería, sin embargo, una lástima que los trabajos sobre la violencia se hiciesen demasiado escasos. El tema de la violencia no está próximo a perder importancia en Colombia. De hecho, ésta la adquiere crecientemente en otros países del mundo.

Es posible que convenga, ante todo, para renovar el impulso de los estudios sobre la violencia, modificar en algo las perspectivas. Las reflexiones coyunturales ocupan hasta el momento un lugar importante. Lo anterior está íntimamente ligado al hecho de que los trabajos confieren preponderancia a la dimensión política de la violencia y toman, a menudo, como punto de partida, las estrategias gubernamentales. En un país con un sistema institucional tambaleante, posiblemente conviene modificar parcialmente el ángulo de análisis, partiendo de la sociedad, de sus fragmentaciones provocadas por las redes de protagonistas armados y del nuevo contexto engendrado por las estrategias de los mismos.

Esta es la sugerencia que haré al final de este informe. Sin embargo, comentaré primero los principales informes que deben ser considerados activos del IEPRI. Son numerosos y de gran importancia.

I. Durante La Violencia, de los años 1945-1964, los investigadores en ciencias sociales no tuvieron ninguna posibilidad de analizar los fenómenos que se desenvolvían. La razón no es únicamente la ausencia de una tradición de investigación rodeada de amenazas sobre las instituciones y los investigadores. Estos no estaban en condiciones de volcarse sobre una auténtica labor de investigación. Atrapados ellos mismos en la confronta-

ción ideológica a través de la cual se expresaba la lucha entre los dos partidos tradicionales, no podían convertir la violencia en *objeto*. Enredados en la sucesión de peripecias políticas, sólo percibían de manera ensordecedora los ecos de los fenómenos concretos de la violencia, que se desenvolvían en un mundo rural confuso y desprovisto de expresiones para hacer entender las atrocidades que lo afectaban. Ni los jefes de las bandas campesinas, ni las *chusmas* conservadoras, ni los sicarios, ni las células de la guerrilla o de auto-defensa, teorizaban sus acciones, o por lo menos no en un lenguaje que se comunicase cómodamente con el de las universidades en las ciudades.

Hubo que esperar hasta 1962 para que un gran libro, el de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, abriera la reflexión sobre La Violencia. El inmenso mérito de esta obra está en asociar la descripción con la reflexión teórica. La descripción es la que permite finalmente acceder al mundo social de la violencia, haciendo entender la voz de los participantes, protagonistas y víctimas, revelando las justificaciones de las prácticas, desvelando la violencia de La Violencia. La obra suscitó controversia. Si se toleraba evocar la aspereza de la disputa entre los partidos tradicionales -factor que fundaría la legitimidad del Frente Nacional-, no se hacía otro tanto con la actualización de la crueldad de los enfrentamientos y, menos aún, de la responsabilidad que cabía a los dirigentes políticos y a sus fichas locales. Al respecto, el silencio era de rigor; sólo la etiqueta de "bandidismo" era admitida para designar la violencia popular y lo que subsistía.

Pero, contrariamente a lo que podría esperarse, esta obra pionera está

lejos de haber conducido pronto a un florecimiento de obras universitarias que la prolongasen. Indudablemente, a finales de los años sesenta y a principios de los setenta, la referencia a la violencia constituía en sí misma una forma de lugar común. Sin embargo, los verdaderos trabajos de investigación para entonces eran escasos. Sólo hasta finales de los años setenta y en los ochenta aparecen las obras que, analizando las dimensiones precisas de la violencia o sus manifestaciones regionales, sacan a la luz la diversidad de violencias que atraviesan La Violencia. Pienso en las de Gonzálo Sánchez y Donny Meertens, de Carlos Miguel Ortiz Sarmiento y en otras.

Un desfase temporal como el anterior manifiesta con claridad las dificultades de todas las suertes que acompañan los análisis de La Violencia. A lo anterior se agrega un desafío propiamente científico, el de elaborar los pasos teóricos que permitan dar cuenta de la diversidad y de la combinación de las dimensiones de los fenómenos. Los paradigmas en boga en los años sesenta y setenta, marxistas inicialmente, ofrecen con frecuencia una imagen simplificada del universo rural, ignoran el papel de los actores reduciéndolos a no ser más que la expresión pasiva de las *estructuras* y anulan las interferencias entre las violencias heterogéneas. Las conclusiones de dichos análisis, que no son con frecuencia más que la prolongación de las premisas, desembocan de este modo en hacer ejercer violencia a la población que sufrió las consecuencias de la misma.

II. Ese tipo de desfase temporal no existe en la situación actual de la violencia. Los estudios no han cesado de

acompañar su desarrollo. Tanto centros universitarios como no universitarios le consagran una parte importante de sus trabajos. Pero resulta innegable que el IEPRI, creado en un momento crítico de violencia generalizada, ha contribuido enormemente al análisis de nuevos fenómenos. Obras colectivas como *Colombia: Violencia y Democracia* publicada en 1987, y *Pacificar la Paz* publicada en 1991, constituyen intentos de diagnóstico de conjunto. La primera tiene el mérito de haber expuesto a la luz la heterogeneidad de las dimensiones de la violencia; la segunda, haber subrayado la diversidad de las problemáticas regionales. Una y otra hacen una amplia referencia al contexto político y social, como si éste explicase suficientemente la reincidencia de la violencia, y se ciñen a describir el papel de los actores organizados y no organizados. De este modo, no concurren únicamente en quebrar la representación de la violencia como un proceso unificado, sino también en abrir el camino hacia el análisis de las interacciones estratégicas entre los diversos actores de la violencia. Conviene sumar a estas dos obras el libro publicado en 1990 bajo la dirección de Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*, el cual provee una visión extremadamente completa de los factores institucionales y sociales de "la crisis".

Entre las otras 35 obras publicadas entre 1986 y 1995 por los miembros del Instituto, individual o colectivamente, casi todas tienen que ver también, directa o indirectamente, con el tema de la violencia. Gran parte de los artículos aparecidos en *Análisis Político* le son consagrados explícitamente. Ellos jalonan los diversos momentos

del proceso y permiten captar sus inflexiones. Si bien en los últimos tiempos *Análisis Político* dedica sin duda un menor espacio a este tema y los artículos de reflexión teórica sobre las sociedades contemporáneas o sobre la globalización ocupan una mayor parte, los balances anuales publicados bajo el título *Síntesis Colombia* permiten asegurar la continuidad de las coyunturas en el terreno de la violencia colombiana.

III. Sin pretender hacer un levantamiento sistemático de las obras y los artículos consagrados al tema de la violencia, es por lo menos deseable hacer una lista aproximada de los aspectos de la violencia que son abordados allí. Esta enumeración es necesaria para considerar enseguida los logros alcanzados y las lagunas teóricas y empíricas.

1. *Aportes al análisis de La Violencia de los años 1930-1950 y de sus improntas en la violencia actual.* Los investigadores del Instituto o asociados al mismo han publicado diversos trabajos sobre La Violencia de los años cincuenta que contribuyen a aclarar el trasfondo de la violencia actual. El libro de Sánchez *Guerra y política en la sociedad colombiana* es uno en el que se analizan las continuidades y discontinuidades entre los dos episodios de violencia. Los libros de J. Guerrero, *Los años del olvido; Boyacá y los orígenes de la violencia*, Elsy Marulanda *Colonización y conflicto: lecciones del Sumapaz*, Eduardo Pizarro *Las FARC 1949 a 1966, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*; D. Betancur y M. García, *Matones y cuatrilleros, origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano*, aportan, sobre la

base de investigaciones empíricas profundizadas, nuevos elementos al conocimiento de los actores de la violencia en el transcurso de las décadas anteriores y, de esta manera, contribuyen a aclarar la memoria de algunos de los actores de la violencia actual.

2 *Relaciones entre el sistema político, el Estado y la violencia.* Este terreno de reflexión es tal vez uno de los más frecuentemente visitados. Está notablemente abordado por Sánchez en *Guerra y política en la sociedad colombiana*; por William Ramírez Tobón en *Estado, violencia y democracia*; por Leal Buitrago en el capítulo "Estructura y coyuntura de la crisis política" del libro *Al filo del caos* y en el libro *Clientelismo: El sistema político y su expresión regional* y en numerosos artículos de *Análisis Político*, notablemente aquellos de Luis Alberto Restrepo y Eduardo Pizarro. Estos trabajos giran en torno a preguntas similares entre sí: 1/ Los vínculos entre violencia y política en la historia colombiana, analizadas en particular en las obras de Sánchez y de Ramírez Tobón. 2/ Las limitaciones y perversiones del funcionamiento democrático como factores de la violencia, tema abordado en particular por Leal Buitrago, Pizarro y Restrepo. 3/ La cuestión de la precariedad del Estado. 4/ Las reformas políticas, en particular aquellas introducidas por la Constitución de 1991, y sus consecuencias en el terreno de la violencia.

3 *Relaciones entre el universo jurídico y ético y la violencia.* Los dos libros de Hernando Valencia Villa, *Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colom-*

biano y *La justicia de las armas*, y el de Iván Orozco, *Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en Colombia*, aclaran los vínculos entre la violencia y la normatividad jurídica y plantean el problema de la calificación otorgada a los diversos tipos de "rebelión", común o política, de acuerdo con las circunstancias.

- 4 *Relaciones entre violencia y conflictos sociales a la luz de la distribución regional de los fenómenos de violencia.* Los artículos de Alejandro Reyes, Ana María Bejarano, J. E. Jaramillo y Darío Fajardo, y de L. A. Restrepo (al igual que su capítulo "Movimientos cívicos en la década de los ochentas" en *Al filo del caos*), contribuyen al análisis de esas relaciones. Aún ahí, se deben distinguir aproximaciones diferentes: 1/ Las relaciones entre conflictos agrarios y violencia (Reyes en particular, pero cabe agregar el capítulo de Zamosc "El campesinado y las perspectivas para la democracia rural" en *Al filo del caos*). 2/ Las relaciones entre los movimientos urbanos y la violencia (Restrepo). 3/ Los estudios monográficos regionales (Bejarano sobre Urabá). 4/ Los análisis sobre "minorías étnicas", indígenas y negras (Jaime Arocha, C. Gros, etc.)

- 5 *Análisis de los protagonistas de la violencia.* Éste tiene que ver ante todo con las organizaciones guerrilleras, pero aborda igualmente a los narcotraficantes y a las fuerzas del orden. 1/ Los estudios sobre la guerrilla son particularmente numerosos. a) Algunos artículos de Jaime Zuluaga Nieto, de Alejo Vargas Velásquez y los trabajos de Pizarro proveen una visión histórica sobre la formación de diversas organizaciones guerrilleras

actuales. b) El artículo de Ramírez Tobón "La liebre mecánica y el galgo corredor: la paz actual con el M-19" en *Análisis Político* contiene una interpretación lúcida de las estrategias del M-19. c) Los artículos de Reyes Posada, Restrepo y Pizarro abordan el tema de las transformaciones de la guerrilla en favor de los recursos materiales que acumulan desafortunadamente a través de diferentes medios. 2/ Las obras y artículos sobre el narcotráfico y los narcotraficantes reflejan diversas formas de abordar el particular. a) Varios artículos de Reyes muestran la difusión geográfica del fenómeno de narcotráfico. b) Los estudios de Alvaro Camacho muestran su impacto en las relaciones sociales. c) Los artículos y el libro de F. Sarmiento y Ciro Krauthausen suministran un excelente análisis de la economía de la droga. d) Las estrategias de enfrentamiento y de negociación de los narcotraficantes con el Estado son con frecuencia analizadas. 3/ Numerosos artículos tienen que ver con la formación y la difusión de las organizaciones "paramilitares", en particular los de Reyes. Los artículos de Pizarro y de Leal Buitrago sobre las fuerzas armadas enfocan ante todo sus relaciones con el poder civil, su autonomía e ideología. El mismo tema se retoma en el libro de Leal Buitrago *El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia*. Dos artículos de Camacho tratan sobre la policía.

- 6 *Las estrategias gubernamentales frente a la violencia.* Este tema es abordado desde diversos ángulos en casi todos los números de *Análisis Político* y en *Síntesis*. En gran medida, la toma en cuenta de la sucesión de las estrate-

gias gubernamentales constituye un punto de partida de numerosos análisis coyunturales.

Esta clasificación, como se dijo, no pretende ser exhaustiva. Permite, no obstante, constatar que el IEPRI ha tratado efectivamente la mayoría de los aspectos de la violencia. Desde *Colombia: violencia y democracia*, se sacaron a la luz sus heterogéneas dimensiones. Los artículos de *Análisis Político* permiten con creces aprehender las diversas coyunturas y procesos.

Estas coyunturas están definidas en términos institucionales. El encadenamiento de sucesivos períodos presidenciales sirve de punto de referencia. No es por lo tanto sorprendente que muchos artículos lleven la marcha de un relato cronológico acompasado por cada elección presidencial. De ahí viene el privilegio otorgado a la dimensión propiamente política del trabajo del Instituto. Uno se podría preguntar si ese privilegio no va en contravía de la afirmación de las dimensiones heterogéneas de la violencia. Se puede preguntar si su resultado no es haber dejado de lado otro estilo de análisis, aquel que partiría de los actores mismos de la violencia, de sus interacciones, y que mostraría, en la medida en que la violencia se prolonga, cómo otro contexto se crea como resultado de las interacciones y cómo surge otra cronología, diferente de la institucional.

Sin embargo, no es de sorprender que un Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales confiera en sus trabajos tal importancia a los sistemas e instituciones políticos.

Más allá de la formación de los investigadores, tres razones adicionales intervienen.

La primera es que el IEPRI no puede hacer nada distinto de adoptar una posición de "espectador comprometido", retomando una expresión de Raymond Aaron. Ninguno de sus trabajos es ajeno a una "toma de posición" favorable al respeto de los derechos humanos, de la "apertura política" y de la búsqueda de soluciones negociadas. Si el IEPRI realiza numerosos trabajos especializados por cuenta de los gobiernos, ello no impide denunciar constantemente las múltiples violaciones de derechos humanos y de acoger en sus publicaciones los informes de America's Watch. Desde sus inicios, sus investigadores, en particular Sánchez, Restrepo y Pizarro han denunciado con vigor los abusos cometidos por la guerrilla, al igual que han señalado la legitimidad de la judicialización de sus acciones, postura que les otorga una verdadera autoridad intelectual y contribuye a que participen en la orientación de la opinión pública. Todas las tentativas de negociación con los protagonistas de la violencia han recibido su adhesión, con matices dependiendo de los autores y, de resto, las publicaciones *Colombia: violencia y democracia* y *Pacificar la Paz* coinciden con momentos en los cuales se puede esperar el éxito de los esfuerzos gubernamentales de pacificación. Los análisis relativos a las estrategias públicas que deben ser adoptadas frente a la economía de la droga son en ocasiones diferentes y, esto se retomará más adelante, algo desconcertantes. Los investigadores del IEPRI no se escapan en ese sentido a las incertidumbres que caracterizan a las élites y a la opinión colombianas.

La segunda razón está ligada a la anterior, en el número de obras y artículos dedicados a las estrategias gubernamentales. Ya lo había dicho: las

medidas adoptadas por cada gobierno son las que sirven las más de las veces como punto de partida para los análisis. Incluso, cuando los artículos de *Análisis Político* se refieren en conjunto a la violencia actual, la referencia a esas estrategias provee los desfases cronológicos. Hay ocasiones en las cuales el investigador, me parece, se identifica no ya con la postura del espectador comprometido sino con aquella de quienes toman las decisiones políticas. Esto puede dar la impresión a veces de limitar la envergadura de los análisis, puesto que la ineficacia o fracaso de las estrategias gubernamentales se patentiza cada vez más. Esto lleva en ocasiones a subestimar las dimensiones "no-políticas" de la violencia, aquellas de las redes de la droga o de la vida cotidiana. Retomaré este punto más adelante.

La tercera razón remite a la responsabilidad imputada al sistema político heredado del Frente Nacional. El carácter "limitado" o "pervertido" de ese sistema es incesantemente invocado como uno de los factores del desencadenamiento de la violencia. No se trata en este punto de negar la relevancia de un factor de tal naturaleza. El asunto es mostrar con precisión las maneras como interviene y no limitarse a tener en cuenta el modo de ser invocado, a título de justificación de su acción, por diversos protagonistas de la violencia, al igual que por diversos sectores sociales no ligados a la misma. ¿Eran entonces las limitaciones del Frente Nacional percibidas de manera similar por todos los sectores sociales, en particular por las "nuevas clases medias", con las cuales, los investigadores tienen más afinidad? La pregunta se puede formular y es relevante. Advierto que no se dispone siempre de estu-

dios que profundicen sobre la vida política local, las relaciones o no relaciones existentes entre la población y los partidos y la selección del personal político, a excepción del libro de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila sobre el clientelismo en Santander. Además, el contexto político ha cambiado singularmente desde 1980. ¿Ha sido ese cambio suficientemente notado? Este sí lo fue cuando se trataba de describir las reformas, como por ejemplo, la adopción de la nueva Constitución, pero no fue percibido, a mi juicio, cuando se tenía en consideración la dislocación de los viejos partidos y la corrupción masiva, la cual, corroyendo las instituciones, transformaba todas las reglas del juego. La insistencia sobre la "responsabilidad" del sistema político hacía correr el riesgo, en la medida en que la violencia se generalizaba, de subestimar el problema de las estrategias de los actores de la violencia y de alimentar la ilusión de que las reformas políticas, por más necesarias que fueran, podían por sí mismas frenar la violencia. Por otra parte, se puede observar que después de la Constituyente, los análisis se han tornado más complejos y el "contexto político" dejó de ser considerado como un elemento estático. Así mismo, las lógicas no directamente políticas que subyacen a la acción de los protagonistas han sido más tenidas en cuenta.

La primacía otorgada al análisis político, incluso institucional, se ha revelado de manera fecunda en varios trabajos. Ya sea que dichos trabajos sean relativos a las políticas públicas frente a la violencia, a los usos del derecho o a las reformas políticas, el aporte del Instituto es considerable.

Así mismo, los investigadores del Instituto han contribuido enormemen-



te a la historia política de la guerrilla, al análisis de las relaciones políticas entre narcotraficantes y los gobiernos, etc. De hecho, este estilo de análisis conviene perfectamente a la descripción de los procesos oficiales de negociación. La revista *Análisis Político* ofrece estudios muy minuciosos sobre estos procesos.

En fin, este paso político tiene la ventaja de evitar el tener que recurrir a nociones hechas y perezosas, como aquélla de la "cultura de la violencia", que me parece bastante poco explicativa, salvo si ésta se articula a un contexto histórico preciso. Igualmente, tiene el mérito, a mi juicio, de alertar sobre una extensión indefinida que llega a asociar la violencia política con la violencia familiar, la violencia de las relaciones entre "géneros" y la violencia infantil, sin que se sepa cómo pasar de la una a la otra, ni en qué sentido Colombia ofrece, al respecto, una especificidad en relación con otros países.

Me pregunto, sin embargo, si la primacía otorgada a lo político no trae consigo algunas limitaciones.

IV. La primera limitación es evidente. Los trabajos no evocan siempre, como se desearía, a la sociedad ni los cambios que la sacuden.

Pienso que evocar el contexto de la violencia actual implicaría que otras variables, no menos significativas que las características del Frente Nacional, entrasen a jugar. La brutal secularización de la sociedad colombiana a fina-

les de los años sesenta es un fenómeno grueso. No es poca cosa pasar de una sociedad que consideraba a la Iglesia católica garante del orden social (labor que, en una región como Antioquia y en el mismo Medellín, la institución cumplía con celo, controlando la vida pública y privada), a una sociedad en la que la Iglesia ha perdido su autoridad y donde lo religioso, aún presente, se convierte en una suerte de "self service" individual que cada cual chapucea y utiliza a su antojo, revolviendo si así se desea, superstición y magia. Resulta deplorable que no exista ningún trabajo preciso en este terreno. Después de todo, se trata de una mutación en la que el efecto político no puede ser subestimado. Es posible referirse a una "secularización política" cuando se constata que la población ha cesado de leer su destino a través de su adscripción partidaria y que lo que se ha denominado como "crisis de representación de los partidos" se desprende del hecho de que, como la secularización religiosa, la secularización política se ha desarrollado de manera negativa, sobre todo, por una pérdida súbita de señales. Sin embargo existen otras variables a tener en cuenta. Las migraciones, urbanas y rurales, han transformado las identidades colectivas. El crecimiento del nuevo sistema educativo afecta el papel de los antiguos mediadores políticos, esos innumerables reproductores del sistema de clientela.

Del mismo modo, no es posible dejar de lado los cambios de expresión

<sup>(1)</sup> Cf. Patrick Michel, *Politique et religion. La grande mutation*, Albin-Michel, Paris, 1994.

de la conflictividad social. Es evidente que los sindicatos y las organizaciones campesinas no son ya portavoces de amplios sectores sociales. La violencia y el dominio de las redes armadas no les son extrañas. Por lo anterior, sería muy interesante saber más acerca de las expresiones actuales de la conflictividad social, las cuales pasan por las movilizaciones repentinas y locales (paros cívicos, etc.) o por la "delincuencia" cotidiana. Los estudios de Reyes y de Zamosc aclaran ciertos aspectos de las acciones campesinas. En el terreno de lo urbano no hay tanta información al respecto. Puede parecer sorprendente que los investigadores otorguen tanta importancia a las "determinantes" políticas de la violencia y tan poco a sus aspectos sociales.

Es evidente que después de más de quince años de violencia actual, la sociedad no sigue siendo la misma. Las barreras sociales se han debilitado, las nuevas realizaciones han quebrantado la dominación de las viejas élites, nuevos modelos de logro se han impuesto, la corrupción ha minado las relaciones con las instituciones, las fronteras de lo local y de lo nacional han sido modificadas y el imaginario político ha sufrido una metamorfosis.

No es posible para un grupo limitado de investigadores abordarlo todo. Sin embargo, queda claro que el análisis de lo político no puede ser separado del análisis de las transformaciones sociales.

V. Resulta importante hacer algunas observaciones con respecto a los elementos que subyacen a los análisis políticos, ya que éstos constituyen el gran aporte del IEPRI. Quisiera subrayar en este orden de ideas, algunas de las limitaciones que se perciben desde

una perspectiva temporal. Haría básicamente al respecto tres observaciones. La primera tiene que ver con la manera como se descifran las estrategias políticas. La segunda toca la noción de "integración política", tan presente en varios trabajos. La tercera traza una atadura entre "democratización" y violencia.

Me parece que el desciframiento de las estrategias políticas, gubernamentales o de otros actores, es en ocasiones conducido con base en las solas intenciones fijadas por ellos y del contenido más manifiesto de las transacciones. Las estrategias gubernamentales son evidentemente las más cómodas de aprehender. Resulta por ende tentador hacer de lo anterior un único punto de partida para los razonamientos. Ya había hecho referencia al carácter institucional de la periodización adoptada con frecuencia por el IEPRI y a que varios de sus estudios eran ante todo de coyuntura política. Pero hay riesgo también en el ejercicio de reducir las estrategias de los protagonistas de la violencia a meras respuestas a las estrategias gubernamentales. El análisis de la violencia no puede subestimar el margen de maniobra de los gobernantes ni el de los protagonistas de la violencia. El gobierno debe convencer a los gremios, a los militares, a la opinión. Ni los unos ni los otros son necesariamente unánimes. Por ejemplo, los generales del Estado Mayor Conjunto pueden eventualmente dividirse y los capitanes pueden tener otros puntos de vista. Por su parte, las guerrillas pueden anunciar en coro y a grito herido que quieren el "diálogo", pero cada cual sabe que el "diálogo" no puede ser más que uno de los tantos componentes de sus estrategias y también que sus frentes se preocupan

también por sus propios intereses. Retrospectivamente, uno se pregunta si los autores, al elaborar artículos a partir de los procesos de negociación, no han subestimado la complejidad de dichos procesos, al estar influenciados por sus escogencias ético-políticas. Es posible que también hayan descuidado las lógicas estratégicas subterráneas en los momentos de fracaso de las negociaciones: las severas condenas hacia la declaración de "guerra" contra el narcotráfico de Barco o la proclamación de "guerra integral" Gaviria, contra las guerrillas, revelan aún allí, las opciones éticas de los investigadores. Estas sólo aclaran de manera moderada los fundamentos de sus declaraciones. Detectar los costreñimientos que pesan sobre los actores, los cálculos secretos que los guían, las fuentes de poder de que disponen, los márgenes de juego que se les ofrece según los momentos, la diversidad de sus lógicas de acción, los fines múltiples que persiguen, en síntesis, los elementos latentes de sus estrategias, me parece una tarea fundamental. Los instrumentos del análisis estratégico y de la sociología de las organizaciones me parece que pueden contribuir a avanzar en este sentido.

La aproximación teórica a la política en términos de "integración" tiene sus gestos de nobleza en la literatura de la ciencia política y de la sociología. Pero las dimensiones de la integración son diversas. Las conductas de los actores no pueden ser concebidas como puras "respuestas" a las propiedades del sistema, salvo si se incurre en un funcionalismo *de facto* que, precisamente, disuelve los actores, reduciéndolos a la expresión de las funciones y disfunciones del sistema. A. Giddens, entre otros, ha subrayado el

doble recorrido que va de las interacciones a las estructuras y viceversa.

La rigidez del Frente Nacional no impone un tipo de respuesta, que sería la violencia, sino que "facilita" diversas posibilidades de acción, entre ellas el recurso a la violencia. No hay que subestimar la capacidad "integradora" de los partidos tradicionales. Después de todo, la población se insurrecciona masivamente contra estos partidos únicamente a partir de 1991. Es posible que ésta tenga una concepción puramente instrumental de la relación con la política o que adopte conductas masivas de retirada. No se trata de que esté completamente "no integrada". Es la apertura política de 1991 que pone súbitamente al desnudo la usura de los partidos, y ello amerita una interrogación. Por otra parte, la dimensión de la "integración" no puede ser separada de otras dimensiones: las formas de expresión de la conflictividad social, el sentido otorgado al Poder, el imaginario político. En fin, uno se puede preguntar si, a pesar de todo, las tradiciones políticas colombianas no traen consigo, además de la rutinización del recurso a la violencia, elementos de debate político y de invocación del estado de derecho que no tienen la misma importancia en países como Brasil o México, en los cuales al Estado le ha sido conferida la misión de organizar la sociedad. Si los trabajos del IEPRI han sido cuidadosos en no imputar la violencia directamente a la miseria, si manifiestan diferentes matices a la hora de explicarla en términos de "exclusión política", no otorgando la suficiente relevancia a las mediaciones que intervienen entre esta exclusión y la violencia. El riesgo de lo anterior radica en quedarse en una dialéctica de la inclusión y de la exclusión, como si el

régimen fuera pura y simplemente autoritario.

La cuestión de la "integración" no remite únicamente a las reglas formales e informales del sistema político colombiano desde 1958. Tal y como los investigadores del IEPRI subrayan con frecuencia, en lo anterior intervienen también los modos de acción y de representación que han sido forjados en el largo plazo y a través de experiencias particulares como *La Violencia*. Se encuentran temas sobre la especificidad de la formación de la nación colombiana y de la "precariedad del Estado". Evidentemente, la fragmentación del espacio político y social es un proceso de largo plazo. Por su parte, la "precariedad del Estado", no se mide únicamente en términos de que la autoridad del Estado se haga o no sentir en diversas regiones, ni en las carencias de infraestructura; hay que pensar que dicha fragmentación también responde a la ausencia de un mito unificador, a la fragilidad de la simbólica nacional, a la incertidumbre de los criterios de legitimidad, a la construcción de un monopolio ejercido por profesionales del derecho que lo convierten en mera fuente estratégica, al flujo de una ciudadanía política reemplazada por la pertenencia a las redes de los partidos políticos, a la fragilidad aún muy grande de la ciudadanía social. El carácter "inacabado de la construcción de la Nación", de acuerdo con la expresión de Fernán González, no constituye una premisa conceptual inerte. Ofrece también a múltiples actores la posibilidad de desarrollar estrategias que la hagan aprovechable y de tener "interés" en el sostenimiento de lo inacabado. Las redes clientelistas se han servido de ello por años, al igual que las redes de actores "ilegales". En cuan-

to a la experiencia de *La Violencia*, ésta ha contribuido a suscitar su propio imaginario. En ambos casos, no hay remisión a un problema únicamente de integración sino a los problemas de socialización y de dar sentido a la experiencia social.

Llego finalmente a los vínculos entre "democratización" y violencia. Como lo he recordado, la violencia es con frecuencia asociada a una situación sostenida de insuficiente democratización. No resulta pues sorprendente que numerosos artículos de *Análisis Político* presenten la democratización como el verdadero remedio para la violencia. No pongo en duda que los dos temas deban estar ligados entre sí. Me pregunto, sin embargo, si no sería conveniente considerarlos también como dos problemáticas relativamente autónomas, desde un punto de vista analítico. La idea de democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia y ésta no se debe resumir como una demanda de democratización.

Estos dos planos me parecen relativamente autónomos, en la medida en que hace tiempo la dinámica de la violencia ha cesado de definirse en términos de las distorsiones del sistema político. Ni el funcionamiento de la economía de la droga, ni la acción de narcotraficantes, paramilitares o guerrillas, ni la violencia cotidiana tienen mucho que ver con la problemática de la democratización. La apertura política iniciada en 1982 y continuada hasta 1991, no tuvo ningún efecto sobre la violencia. Lo anterior no significa que ésta no fuera necesaria y que por ende no hay que empujarla más lejos. Incluso diría que ahora ello es más indispensable que nunca, porque me pregunto si la violencia no dio un

paso brutal hacia atrás desde 1994. En todo caso, hay que partir del presupuesto de que la democratización no constituye en sí misma una estrategia suficiente de cara a la violencia. No es posible ahorrar reflexiones sobre las estrategias necesarias para superar esa violencia, en un contexto democrático.

La violencia es, por sí misma, destructora de los fundamentos de la coexistencia y la creencia democráticas. Para los sectores de la población más afectados, la prioridad no es el mejoramiento del funcionamiento democrático sino el restablecimiento de una cierta seguridad. En la medida en que el régimen no logre demostrar al respecto una capacidad de adoptar medidas efectivas, la población tenderá a desviarse de la política institucional. ¿Se debe pensar entonces que las esperanzas reposan sobre la "democracia local"? Valdría la pena disponer de monografías al respecto, y contar, por ejemplo, con descripciones minuciosas de experiencias como las de Apartadó o Aguachica.

La democratización no puede ser analizada solamente al nivel de las reglas institucionales. Tan o casi tan importantes son las prácticas políticas concretas. La revista *Análisis Político* les ha raramente consagrado espacio. Ahora bien, se encuentra material sobre los movimientos sociales, pero dudo que éstos sean todavía portadores de una "ampliación de una cultura política democrática", tal y como lo sugiere Pizarro en un artículo de *Análisis Político* No. 10. En cambio, no hay estudios sobre los modos de organización de los colonos (*Juntas de Pobladores*), ni sobre la eventual transformación de las costumbres políticas en el contexto de la descentralización, ni sobre el funcionamiento de las centrales sindicales.

Tampoco he encontrado ningún ensayo de interpretación sistemática de las razones por las cuales la Constitución "participativa" de 1991 se ha expresado por una caída de la participación política. Estos son, por lo tanto, los temas esenciales para captar las virtudes de la democratización o los obstáculos en su camino.

Además, la problemática de la democratización en Colombia no puede estar aislada de lo que sucede en el resto del mundo. Por doquier, en relación con la globalización económica y la adopción del neoliberalismo, se asiste a una crisis de legitimación de los regímenes y de la representatividad de los partidos. El resquebrajamiento del Estado nacional y de las ideologías del progreso va de la mano con un déficit de sentido de la política. La reflexión sobre la democracia colombiana no puede reducirse a constatar la herencia histórica; debe así mismo considerar el efecto de sus recientes mutaciones.

Es decir, que el razonamiento sobre la democratización sólo se puede construir si se parte tanto de los modos de socialización en el largo plazo como de los efectos de la violencia y de la coyuntura mundial; de las reglas institucionales y de las prácticas. Separando analíticamente el tema de la democratización del de los fenómenos de violencia, resulta sin duda más sencillo medir la dinámica particular de éstos últimos, como puede ser, analizar las nuevas formas de dominio y expropiación territorial y los repoblamientos de zonas que progresivamente se observan en varios lugares del país.

VI. Haría una anotación complementaria respecto de las limitaciones inducidas por la preponderancia del análi-

sis "político". En la medida en que se privilegian los "factores políticos de la violencia", algunas dificultades surgen cuando se trata de describir las dimensiones de la violencia que no son explícitamente políticas y, *a fortiori*, las interacciones entre los protagonistas que no tienen sino de manera parcial proyectos políticos. Daré tres ejemplos.

Ciertamente, estos trabajos otorgan un espacio amplio a la economía de la droga y a los diferentes sectores que están asociados a la misma. Sin embargo, se percibe una vacilación en la manera de tratar el "problema de la droga" y su impacto en la sociedad y en las instituciones. Varios artículos parecen retomar con bastante facilidad la tesis periodística (o "nacionalista") según la cual el problema es imputable a los países consumidores y que la legalización es la única salida. La tesis es en sí discutible, ya que se revela que, incluso en las sociedades en que los gobiernos no obstaculizan la cultura y la comercialización de la droga, éstas quedan a merced de las fuerzas que buscan establecer monopolios y convertirse en amos de los precios. Sobre todo, la tesis no dispensa de interrogarse sobre las políticas que Colombia debe adoptar por voluntad propia o en su contra. La cuestión que quiero subrayar es, sin embargo, diferente. Tiene que ver con la responsabilidad de la expansión de la economía de la droga en el surgimiento y difusión de la nueva violencia. Dos tesis contemporizan. Una señala que los factores políticos son fundamentales y que la economía de la droga no es más que un elemento secundario. La otra otorga al auge de la economía de la droga efectos fuertes sobre la violencia y que éste ha contribuido a redefinir el contexto y

las estrategias de los actores. La escogencia entre una hipótesis y otra conduce a razonamientos bastante diferentes sobre la violencia. Se puede considerar que no son excluyentes entre sí. Pero hay que reconocer que la segunda no puede ser desagregada si quiere uno darse cuenta del deterioro institucional y político actual y del auge en potencia de varios protagonistas de la violencia.

El impacto de la violencia no directamente política no se acomoda fácilmente al esquema político. Tal es el caso de la violencia "ordinaria", aquella que atraviesa las relaciones cotidianas. Igualmente, de los narcotraficantes cuya acción no se la reduce a las presiones que ejercen sobre el Estado ni a las negociaciones oficiales u oficiosas que se desarrollan. El lector de *Análisis Político* constata que los actores del narcotráfico han sido presentados de diversas maneras: como empresarios, por ahora estigmatizados pero destinados a insertarse en la lógica del capitalismo, como innovadores sociales introduciendo nuevos valores y nuevos vínculos sociales, etc. Todas esas lecturas resultan interesantes. Únicamente me parecen controvertibles cuando llegan a la idea de que esos actores son definitivamente "funcionales" al mantenimiento del sistema político o social. Ello implica regresar de nuevo a un funcionalismo discutible, como si hubiese un sistema independiente de la interacción entre los actores, y descuidar el hecho de que los efectos de la economía de la droga son, por decir lo menos, contradictorios. Lo anterior implica aislar ciertas dimensiones, dejando de lado toda la complejidad de las interferencias con los demás actores.

Ningún protagonista puede ser descrito sobre la base de su sola identidad

política. Las guerrillas constituyen también una manera de organizar a la población. El artículo de Pizarro "Elementos para una sociología de la guerrilla" (*Análisis Político* No. 12) y los estudios de Alfredo Molano ofrecen elementos de análisis al respecto. Vale la pena retomar este camino. El artículo de Carlos Mario Perea "Amapola, campesinos y glifosato" (*Análisis Político* No. 24) ofrece una preciosa descripción de la inserción de los campesinos en la cultura de la droga. Valdría la pena realizar otros estudios de esta naturaleza. Considerando las bases sociales de los diversos protagonistas, estos trabajos ayudan a aprehender las dimensiones de sus estrategias y su evolución en el tiempo. Es necesario observar con la mayor exactitud posible cómo se dan las adhesiones a uno u otro protagonista armado, qué contenidos de lealtad o de cálculo utilitarios traen consigo, qué niveles de estabilidad manifiestan, qué similitudes pueden existir con las viejas adscripciones a los partidos tradicionales. Se puede pensar que son cada vez más las regiones en las cuales diferentes grupos armados se enfrentan por el control de la población y, por ende, donde la coacción y el terror juegan un papel absolutamente relevante. Estas son realidades que deben ser estudiadas de cerca.

VII. En este punto, llego a una observación general.

Me pregunto si no sería útil ahora, al menos desde el punto de vista heurístico y teórico, invertir el punto de

partida, considerando no las estrategias gubernamentales sino aquellas de los diversos protagonistas de la violencia.

En veinte años, las lógicas de la violencia han cesado de "responder" a la acción del gobierno. Esas han terminado por engendrar sus propios modos de regulación, de suscitar interacciones que se alimentan unas a otras, de crear su propio contexto. No se trata únicamente de las tensiones a las que se debe adaptar la acción gubernamental. Luego de remodelar la sociedad, ellas influyen directamente sobre y en el interior de las instituciones.

Ya se había indicado atrás: siguiendo a Giddens, por ejemplo, las "estructuras" de un sistema no son más que la sedimentación de series de interacción. Se puede debatir acerca de esta afirmación epistemológica. Sin embargo, su validez no me parece discutible en la medida en que las interacciones entre grupos que disponen de medios de fuerza regulan las relaciones sociales y asumen el control institucional en ciertas regiones. Agregaría que una opinión metodológica de esta naturaleza puede inducir a tipos de razonamiento bastante diversos. En sus estudios sobre la mafia italiana, Gambetta parte de la constitución histórica de las relaciones de desafío y las estrategias mafiosas para la imposición de relaciones que reintroducen una cierta previsibilidad. En un libro sobre la violencia irlandesa, de suyo bastante confuso, *Formations of Violence. The narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland*<sup>2</sup>. A. Feldman analiza la manera como la violencia fabrica una nueva concepción de

<sup>(2)</sup> The University of Chicago Press, Chicago, 1991.

territorio, de cuerpo, de relaciones entre los miembros de dos comunidades.

Hay dos ejemplos de razonamientos que parten de lógicas estratégicas de la violencia.

En el caso colombiano, una aproximación que parta de las estrategias de los actores, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- a. Los modos de constitución de las redes de influencia territorial y social impuesta por los actores violentos y las formas de adaptación de la población a estos. Una red de influencia puede reposar, de acuerdo con los momentos, sobre grados diferentes de adhesión. Puede definir normas explícitas o implícitas, pero puede igualmente apelar al sentimiento del miedo a través de acciones puntuales. En ciertos casos, es susceptible de parecerse a las redes de los partidos tradicionales. Puede apelar a los intereses, como lo hacen las guerrillas en las regiones de cultivos ilícitos, a la lealtad, a la obediencia forzada. Situaciones radicalmente diversas surgen si una red de influencia posee un monopolio local o si entra en competencia/conflicto con otras redes de influencia. Tanto las estrategias como las formas de adaptación de la población cambian en función de una u otra de las situaciones arriba anotadas.
- b. Las formas de interacción entre los diversos protagonistas. Su estudio supone tomar en cuenta la multipli-

cidad de "recursos" económicos, políticos, sociales y militares de que dispone cada uno de ellos a nivel local. Pero se trata igualmente de aprehender las "transacciones" y compromisos implícitos que intervienen. Con frecuencia se ha puesto de relieve el hecho de que las economías locales continúan funcionando a pesar de la violencia y que las confrontaciones directas entre actores como la guerrilla y los paramilitares son relativamente poco numerosas, dándose éstas más frecuentemente a través de la población civil. Lo anterior incita a intentar comprender las "reglas de juego subyacentes", a diferenciar las masacres que se ajustan al cuadro de esas reglas de juego y aquéllas que buscan modificarlas.

- c. La manera como esas interacciones estratégicas contribuyen a definir un nuevo horizonte para la población y a modificar el funcionamiento de las instituciones. Al respecto, veo dos temas sobre los cuales es necesario profundizar: uno tiene que ver con la manera como los individuos inmersos en los contextos de violencia dan cuenta de su experiencia. El otro se relaciona con la formación de opinión pública en tales contextos.
- d. Los componentes de las miradas estratégicas de los actores organizados y de las estrategias individuales en situación de violencia. En una obra reciente, *Sociologie de l'expérience*<sup>1</sup>,

---

<sup>(1)</sup> Seuil, Paris, 1994.



F. Dubet señala a la experiencia como noción central para describir los comportamientos irreductibles a la persecución de estrategias de interés y a la expresión de roles sociales. Esta noción de experiencia pretende recoger una pluralidad de lógicas de acción, refiriéndose unas a la integración y a la identidad, las otras a las estrategias y las últimas a la "subjetivación". Me parece que es un buen paso no sólo partir de los actores sino también sugerir la explosión de los mismos en función de diversas lógicas. Tal explosión es aún más sensible en una sociedad, como la colombiana, en la cual me parece que se han puesto en juego siempre las identidades más fluidas. Dicha fluidez se acentúa más en situaciones de violencia y, de resto, constato que ningún actor ve en la violencia el producto de un conflicto entre las identidades colectivas, culturales o sociales, estables. De ahí la importancia de asir los juegos fluctuantes a los cuales da lugar la experiencia de la violencia.

e. Con frecuencia tuve la oportunidad de escribir que la violencia interfería en las fronteras de lo político. Esta pregunta por las fronteras de lo político no se formula únicamente en el caso de Colombia (CF. Ch Maier, *Changing Boundaries of the Political*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987). Adquiere sin embargo una relevancia especial en un contexto de violencia generalizada. Gran parte de las interacciones estratégicas pueden leerse como una forma de crear una esfera que no se comunica ya con la esfera política reconocida.

Proceder a realizar tal cambio de perspectiva no significa un abandono de las reflexiones sobre las estrategias posibles de cara a la violencia. La "violencia" es la yuxtaposición de fenómenos muy diversos. Desde ese punto de vista, suscribo plenamente las conclusiones del libro *Colombia: Violencia y Democracia*. De este modo, el desafío consiste precisamente en superponer y combinar diversas aproximaciones teóricas. Al lado de las estrategias organizacionales, hay lógicas de desestructuración de la acción social, de la crisis institucional, del funcionamiento y de la normatividad de la "delincuencia" en un universo de reglas *sui generis*, etc.

Creo por lo anterior necesario que los investigadores del IEPRI perseveren también en la perspectiva que han adoptado con frecuencia. Esta es la condición para que el diagnóstico sobre la violencia pueda tener también un carácter prescriptivo, incluso normativo, lo cual es indispensable en una situación confusa. Mi sugerencia apunta, entonces, a completar esta perspectiva incitando simultáneamente otro tipo de construcción teórica.

IX. Acerca de los objetos y de los campos de investigación.

Si mis sugerencias tienen alguna validez, lo que sigue puede dar luces para trabajarlas con base en objetos y campos específicos.

Considero que los estudios regionales son cada vez más importantes. La revista *Análisis Político* ha publicado esbozos de estudios de esta naturaleza, por ejemplo sobre Urabá. Creo indispensable seguir este camino. Igualmente, se puede pensar en elaborar monografías sobre ciudades. Sería bastante interesante tener una sobre Barrancabermeja, etc.

Valdría así mismo la pena realizar un trabajo sistemático sobre las continuidades/discontinuidades entre las regiones de la vieja Violencia y las de la violencia actual.

Finalmente, sugeriré una lista de temas que ameritarían, a mi juicio, interés.

- Las representaciones que las poblaciones afectadas se hacen de la violencia;
- las trayectorias y las estrategias individuales en el contexto de violencia;
- los modos de adaptación frente a los diversos costreñimientos a que son sometidas dichas poblaciones;
- los modos de conformación de la protesta colectiva en situación de violencia;
- las estrategias de los alcaldes, de los jueces y de los diversos sectores de la sociedad civil en las zonas de violencia;
- las estrategias de adaptación de las unidades de producción, agrícolas o industriales, frente a la violencia;
- las condiciones de formación de la opinión pública en una coyuntura de violencia. Cada cual puede notar que la violencia ha sido considerada como un fenómeno banal, aún nor-

mal, como si la violencia estuviera en el orden de cosas. Mitos colectivos ("la misma violencia de siempre") y algunas expresiones individuales son las dos maneras de contar la violencia. Pero tal vez ello vaya al encuentro de una opinión pública sobre la violencia. Aquella parece surgir en ocasiones a raíz de acontecimientos como los "magnicidios" o las grandes masacres. Pero todo se sucede como si ellos, a falta de ser interpretados en el interior de una trama clara, cayeran prontamente en el olvido. ¿Qué papel juega el juicio ambiguo sobre la economía de la droga en la dificultad de constituir una opinión pública?

- las transformaciones de los valores y de la relación con las normas que tienen que ver con la violencia.

Hay que subrayar que la violencia no es un fenómeno privativo de Colombia. Este es, por definición, un fenómeno complejo y multidimensional y además, de amplio interés en muchas sociedades. El ejercicio comparativo con relación al Líbano, a Afganistán, a Argelia, etc., puede ser de gran utilidad.

Los saberes acumulados del IEPRI deben permitirle, más allá del análisis coyuntural de la violencia colombiana, proponer interpretaciones que sean pertinentes para aclarar otras situaciones de violencia. Este es el sentido de mi comentario.